

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO



*“Al servicio de la justicia y de la paz social”*

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  
SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL

PROCESO	EJECUTIVO
DEMANDANTE	BANCO GRANAHORRAR S.A.
DEMANDADOS	CARLOS ADÁN GUTIÉRREZ CANO Y/O
INSTANCIA	SEGUNDA –APELACIÓN AUTO-
PROCEDENCIA	JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE MEDELLÍN
RADICADO	05001 31 03 005 2002 00027 01 INTERNO 2023-210
PROVIDENCIA	AUTO INTERLOCUTORIO N°192
TEMAS Y SUBTEMAS	LAS MEDIDAS CAUTELARES.
DECISIÓN	CONFIRMA
MAGISTRADA	MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO
PONENTE	

**Medellín, diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintitrés (2023).**

Procede el Tribunal a decidir el recurso de apelación formulado por el apoderado judicial de los ejecutados señores Carlos Adán Gutiérrez Cano y María Riguey González Velásquez, en el proceso de la referencia, frente al auto de fecha 18 de mayo de 2023 (Archivo digital 20. C 08 Ejecución), mediante el cual, de conformidad con el artículo 593 del C.G.P., se decretó el embargo del inmueble identificado con F.M.I. 01N-5070787, de propiedad de los ejecutados, el cual se encuentra inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, Zona Norte.

**I. ANTECEDENTES**

El Banco Granahorrar S.A. (Hoy BBVA) promovió demanda ejecutiva hipotecaria en contra de los señores Carlos Adán Gutiérrez Cano y María Riguey González Velásquez, proceso dentro del cual fue librado mandamiento de pago el día 5 de abril de 2002; así mismo se decretó el embargo del bien sobre el que se constituyó garantía hipotecaria, inmueble identificado con F.M.I. 01N-5070787; la

medida de embargo fue inscrita en la anotación 12 del certificado de tradición y libertad. Al interior del proceso ya fue proferida decisión que ordena seguir adelante la ejecución en contra de los demandados, así como el remate de los bienes embargados y secuestrados (Archivo digital 091 C. 01. Primera Instancia C.001 Principal) y mediante providencia de 9 de marzo de 2022, se aceptó la cesión del crédito en favor del señor Juan David Chica Ochoa (Archivo digital 005. C 08 Ejecución),

El Juzgado que tiene actualmente el conocimiento del proceso, recibió solicitud de decretar nuevamente el embargo del bien, así mismo recibió notificación electrónica de la Resolución N°0778 de 14 de octubre de 2022, por medio de la cual la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Zona Norte de Medellín, decidió la solicitud de cancelación de una medida cautelar de embargo, dando aplicación al artículo 64 de la Ley 1579 de 2012, con respecto a la matrícula inmobiliaria N° 01N-5070787 (Archivo digital 0016. C 08 Ejecución).

A través de auto de 18 de mayo de 2023, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Medellín decretó, de conformidad con el artículo 593 del C.G.P. el embargo del inmueble identificado con F.M.I. 01N-5070787, propiedad de los demandados, providencia frente a la cual acudieron éstos a interponer recurso de reposición y apelación en subsidio, poniendo de presente que se trata de una demanda que tiene más de 20 años de radicada y que por lo tanto no es viable mantenerse en el tiempo vinculado a un proceso.

Como argumentos del recurso se hace referencia a inconformidades relacionadas con la liquidación de la obligación y se enfatiza en que por la falta de gestión de la parte demandante el proceso debía estar terminado, lo cual no ha ocurrido porque el despacho no ha accedido a las solicitudes que le han efectuado; considera que no es viable que se decrete nuevamente la medida, pidiendo que se analice si ha desaparecido la causal por la cual se ordenó su levantamiento. (Archivo digital 21. C 08 Ejecución).

Del recurso se corrió traslado a la parte demandante, quien no hizo uso del mismo (Archivo digital 24. C.08 Ejecución); luego de lo cual, fue decidido mediante auto de 17 de agosto de 2023, manteniendo incólume el decreto de la medida y concediendo el recurso de alzada en el efecto devolutivo para ante esta Corporación (Archivo digital 25 C 08.Ejecución).

## II. CONSIDERACIONES

### LAS MEDIDAS CAUTELARES.

Por sabido se tiene que las medidas cautelares en el proceso civil están configuradas para asegurar el cabal cumplimiento de las decisiones que se adopten al interior del mismo, principalmente, en la providencia que resuelva las pretensiones del juicio. El concepto doctrinario más autorizado en materia procesal enseña que la finalidad de las cautelas es la de evitar *“aquellas alteraciones en el equilibrio inicial de las partes que pueden derivar de la duración del proceso”*.<sup>1</sup>

La Corte Constitucional también ha tenido la oportunidad de exponer lo siguiente sobre las medidas cautelares. Así en la Sentencia T 379 de 2004, expresó:

(...) son instrumentos con los cuales el ordenamiento protege, de manera provisional, y mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso. De esa manera el ordenamiento protege preventivamente a quien acude a las autoridades judiciales a reclamar un derecho, con el fin de garantizar que la decisión adoptada sea materialmente ejecutada. Por ello, esta Corporación señaló, en casos anteriores, que estas medidas buscan asegurar el cumplimiento de la decisión que se adopte, porque los fallos serían ilusorios si la ley no estableciera mecanismos para asegurar sus resultados, impidiendo la destrucción o afectación del derecho controvertido.

El régimen de las medidas cautelares es taxativo y de interpretación restringida, en aras de limitar la afectación de los bienes de las personas demandadas en un juicio. La afectación de limitar el dominio de las personas respecto de sus bienes, es facultad exclusiva del legislador, mediante normas procesales que son de orden público, y por tanto no son disponibles ni por las partes, ni mucho menos por el Juez. Dicha idea ha sido recogida por la doctrina, así: *“Tampoco se ha dejado librada su procedencia y oportunidad al criterio del Juez, sino que se las ha autorizado expresamente en cada caso, de donde resulta que por su carácter excepcional las disposiciones que a ellas se refieren son de interpretación restrictiva”*<sup>2</sup>

Como características de la medida cautelar es adecuado indicar que consiste generalmente en un acto jurisdiccional, ya que por medio de ésta se cumple una

---

<sup>1</sup> CARNELUTTI, Francesco. *Derecho y proceso*. Buenos Aires: E.J.E.A. 1971, pag. 415.

<sup>2</sup> CHIOVENDA, Giuseppe. *Principios de derecho procesal civil*, traducción de la 3 edición, pagina 279.

de las funciones del juez, que es asegurar el cumplimiento de las decisiones judiciales. También se caracterizan las medidas por ser instrumentales o accesorias, ya que si se miran individualmente no tienen sentido o efecto práctico. La provisionalidad como característica es corolario de la anterior, ya que sólo persisten mientras esté en curso el proceso y después de éste en casos especiales.

## **CASO CONCRETO**

Teniendo claro que el motivo de inconformidad expuesto por la parte recurrente frente al auto de fecha 18 de mayo de 2023, se concreta en que considera no podía ser decretada nuevamente la medida de embargo del bien inmueble sobre el cual se constituyó la garantía real, porque la inscripción del embargo fue cancelada por caducidad, mediante Resolución 0778 de 14 de octubre de 2022, proferida por el Registrador de Instrumentos Públicos de Medellín Zona Norte, importante resulta entonces referirse aquí a la norma contenida en el artículo 64 de la Ley 1579 de 2012, pues fue ésta la disposición normativa que sirvió de sustento a la referida cancelación.

Así entonces, tenemos que el artículo 64 de la Ley 1579 de 2012 dispone:

**ARTÍCULO 64. CADUCIDAD DE INSCRIPCIONES DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES.** Las inscripciones de las medidas cautelares tienen una vigencia de diez (10) años contados a partir de su registro. Salvo que antes de su vencimiento la autoridad judicial o administrativa que la decretó solicite la renovación de la inscripción, con la cual tendrá una nueva vigencia de cinco (5) años, prorrogables por igual período hasta por dos veces.

Vencido el término de vigencia o sus prórrogas, la inscripción será cancelada por el registrador mediante acto administrativo debidamente motivado de cúmplase, contra el cual no procederá recurso alguno; siempre y cuando medie solicitud por escrito del respectivo titular(es) del derecho real de dominio o de quien demuestre un interés legítimo en el inmueble.

**PARÁGRAFO.** El término de diez (10) años a que se refiere este artículo se empieza a contar a partir de la vigencia de esta ley, para las medidas cautelares registradas antes de la expedición del presente estatuto.

Pues bien, es clara la referida norma en señalar que lo que tiene una vigencia de diez (10) años es la inscripción de la medida de embargo, es decir, el acto que lleva a cabo el registrador de instrumentos públicos; transcurrido dicho tiempo pierde vigencia la anotación, a menos que antes de su vencimiento, la autoridad judicial o administrativa que decretó la medida solicite la renovación de la inscripción, con la cual tendrá una nueva vigencia de cinco (5) años, que se pueden prorrogar por un período igual, hasta por 2 veces.

Lo acontecido entonces, como bien lo indicó el juzgado de primer grado, fue la cancelación de la inscripción de la medida, no el levantamiento de la medida cautelar de embargo decretada sobre el inmueble y comunicada a la oficina de registro en su momento; empero como el efecto de la cancelación es que la cautela carece de fuerza legal y no recupera su eficacia sino en virtud de decisión judicial o administrativa en firme, por así disponerlo el artículo 63 de la mencionada Ley 1579 de 2012, dada la solicitud de la parte demandante, lo adecuado era decretarla de nuevo, como así se procedió por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Medellín, porque aunque como se anteló, la medida no fue levantada al interior del presente juicio ejecutivo, sí perdió su fuerza legal en virtud de la decisión adoptada por el Registrador de Instrumentos Públicos de Medellín Zona Norte en la Resolución 0778 de 14 de octubre de 2022, acto administrativo que tiene esa injerencia en el proceso, pero cuyos efectos no se extienden hasta el punto de impedir que sea nuevamente decretado el embargo, máxime si se tiene en cuenta que el capítulo XIV de la Ley 1579 de 2012, donde se ocupa la norma de las cancelaciones en el registro, nada indica al respecto, como tampoco la Instrucción Administrativa 08 del 30 de septiembre de 2022, proferida por el Superintendente de Notariado y Registro y mediante la cual se impartieron orientaciones a los Registradores de Instrumentos Públicos, sobre la aplicación del artículo 64 de la Ley 1579 de 2012.

De esta manera entonces, imposible resulta revocar la decisión contenida en el auto proferido por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Medellín, el día 18 de mayo de 2023, mediante el cual, de conformidad con el artículo 593 del C.G.P., decretó el embargo del inmueble identificado con F.M.I. 01N-5070787, de propiedad de los ejecutados, el cual se encuentra inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, Zona Norte, porque

además, no existe prohibición legal alguna que impida que luego de cancelada la anotación de la medida cautelar de embargo, por caducidad, lo cual tiene efectos en cuanto a la fuerza legal de la medida, ésta sea nuevamente decretada.

**CONCLUSIÓN**

En suma, por no asistirle razón a la parte recurrente en sus alegaciones, se impartirá confirmación a la decisión objeto de alzada.

No obstante, la resolución de la instancia ser negativa para la parte recurrente, no habrá lugar a imponer condena en costas, toda vez que no se causaron. Lo anterior atendiendo la regla 8 del artículo 365 del Código General del Proceso.

En mérito de lo expuesto, el **Tribunal Superior de Medellín en Sala Unitaria de Decisión Civil**,

**III. RESUELVE**

**PRIMERO. CONFIRMAR** el auto de fecha 18 de mayo de 2023, mediante el cual el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Medellín, decretó el embargo del inmueble identificado con F.M.I. 01N-5070787, de propiedad de los ejecutados, el cual se encuentra inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, Zona Norte.

**SEGUNDO. ABSTENERSE** de imponer condena en costas.

**NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE**

**MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO**

**Magistrada**

*(Firma electrónica de conformidad con el artículo 105 del C.G.P. en concordancia con la Ley 2213 de 2022)*

**Firmado Por:**

**Martha Cecilia Ospina Patiño**  
**Magistrado Tribunal O Consejo Seccional**  
**Sala 007 Civil**  
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **e25aa3af0899db8d3d951167d11dc2fda42043ab5dad5391054bc4f1be6332d8**

Documento generado en 19/12/2023 09:44:21 AM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**